

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

S/C/M/63

11 de noviembre de 2002

(02-6194)

---

## Consejo del Comercio de Servicios

### INFORME DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2002

#### Nota de la Secretaría<sup>1</sup>

1. El Consejo del Comercio de Servicios celebró una reunión el 25 de octubre de 2002. El orden del día de dicha reunión figura en el aerograma WTO/AIR/1935.
2. La Presidenta comunicó su intención de informar al Consejo, en el marco del punto "Otros asuntos", acerca de sendas cartas que había recibido de los Presidentes del Comité de Comercio y Desarrollo en Sesión Extraordinaria y del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Transferencia de Tecnología. A continuación propuso que el Consejo adoptara el orden del día distribuido.
3. El Consejo así lo acordó.
- A. **NOTIFICACIONES AL CONSEJO DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 7 DEL ARTÍCULO V DEL AGCS**
4. La Presidenta señaló a la atención de los Miembros la notificación conjunta presentada de conformidad con el artículo V (Integración económica), por Jordania y los Estados Unidos contenida en el documento S/C/N/193. Sugirió que el Consejo tomara nota de la notificación y que el acuerdo notificado de conformidad con el párrafo 7 del artículo V del AGCS se remitiese para su examen al Comité de Acuerdos Comerciales Regionales.
5. El Consejo así lo decidió.
- B. **REAPERTURA DEL QUINTO PROTOCOLO PARA SU ACEPTACIÓN POR LA REPÚBLICA DE BOLIVIA**
6. La Presidenta señaló a la atención del Consejo una comunicación de la República de Bolivia, que figuraba en el documento S/C/W/214, en la que solicitaba que el Consejo reabriera el Quinto Protocolo anexo al AGCS relacionado con los servicios financieros, para su aceptación por la República de Bolivia. Asimismo, señaló a la atención un proyecto de decisión a ese respecto, contenido en el documento S/C/W/215, para su examen y adopción por el Consejo.
7. El representante de Bolivia solicitó que en la decisión se especificara que se abriría de nuevo el Quinto Protocolo durante un período de seis meses.
8. La Presidenta propuso que el Consejo adoptara el proyecto de decisión contenido en el documento S/C/W/215, indicándose en el último párrafo que el protocolo estaría abierto para su aceptación por Bolivia hasta el 31 de mayo de 2003.

---

<sup>1</sup> Este documento se ha preparado bajo la responsabilidad de la Secretaría y sin perjuicio de las posiciones de los Miembros ni de sus derechos y obligaciones en el marco de la OMC.

9. El Consejo así lo decidió.<sup>2</sup>

**C. EXAMEN DE LA TRANSICIÓN DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 18 DEL PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA**

10. La Presidenta señaló a la atención del Consejo la sección 18 del Protocolo de Adhesión de la República Popular China, que disponía la realización de un examen anual de la aplicación por China del Acuerdo sobre la OMC y de las disposiciones conexas del Protocolo de Adhesión de China. Como se indicaba en dicha sección, el Consejo del Comercio de Servicios era uno de los órganos en los que había que realizar ese examen. Manifestó que, según lo acordado en la última reunión del Consejo, había mantenido consultas sobre el calendario del examen y agradeció a China su cooperación en esa cuestión. Comunicó también que los resultados del examen del Consejo del Comercio de Servicios, así como de los órganos mencionados en la sección 18 del Protocolo, se comunicarían al Consejo General, que llevaría a cabo su propio examen.

11. La Presidenta comunicó que el Comité de Servicios Financieros había realizado y concluido el 21 de octubre un examen de la transición de conformidad con la sección 18 del Protocolo de Adhesión de China y que su presidencia había presentado un informe, que figuraba en el documento S/FIN/7.

12. La Presidenta propuso que el Consejo tomara nota del informe del Comité de Servicios Financieros en el entendimiento de que formaría parte del informe del Consejo del Comercio de Servicios al Consejo General.

13. Así se decidió.

14. Pasando al examen del Consejo, la Presidenta recomendó que se pidiera en primer lugar a la República Popular China que respondiera a las observaciones y preguntas contenidas en las comunicaciones de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros (S/C/W/211 y S/C/W/211/Corr.1), los Estados Unidos (S/C/W/212), el Japón (S/C/W/213), el Taipei Chino (S/C/W/217) y Australia (S/C/W/219). Posteriormente los Miembros podrían formular observaciones y preguntas adicionales y China tendría la oportunidad de responderlas.

15. El representante de China se congratuló de la oportunidad de dirigirse al Consejo para hacer una exposición sobre la aplicación de los compromisos contraídos por China en relación con el comercio de servicios en el marco de la sección 18 del Protocolo de Adhesión de China. Dijo que el Gobierno chino daba importancia al examen, como lo demostraba la composición de la delegación, de la que formaban parte altos funcionarios de la capital pertenecientes a los órganos administrativos de servicios competentes, es decir, el Ministerio de la Industria de la Información (MII), el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Construcción y el Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica. Estaban presentes para responder a las observaciones y preocupaciones planteadas por otros Miembros. Confiaba en que el examen permitiría llevar a cabo un intercambio de información, de manera que los Miembros comprendieran mejor los esfuerzos que había realizado China y los logros conseguidos en el ámbito de los servicios desde su adhesión a la OMC. Añadió que estructuraría en dos partes su intervención: 1) una breve exposición de los preparativos realizados por China para el examen y la aplicación de sus compromisos en la esfera de los servicios, y 2) respuestas a las observaciones y preguntas recibidas de los Miembros que expresaban una preocupación compartida.

16. El representante dijo que con antelación se había facilitado al Consejo del Comercio de Servicios información sobre el comercio de servicios, según lo dispuesto en el anexo IA del Protocolo de Adhesión de China, y se habían hecho notificaciones de conformidad con el artículo III

---

<sup>2</sup> La decisión se publicó con la signatura S/L/108.

del AGCS. La información facilitada incluía la situación en materia de acceso a los mercados en los sectores y subsectores consignados en la Lista de Compromisos Específicos de China, una lista de los órganos administrativos responsables de los diferentes sectores o subsectores de servicios, información sobre la independencia de los órganos de reglamentación con respecto a los proveedores de servicios, información relacionada con la lista de exenciones de la obligación del trato NMF, y las leyes, reglamentos y medidas administrativas relacionadas directamente con el acceso a los mercados en sectores y subsectores concretos de servicios. En relación con las leyes, reglamentos y medidas administrativas señaló que un examen preliminar había puesto de manifiesto que 45 de ellas guardaban una relación directa con el acceso a los mercados en sectores y subsectores de servicios concretos y que, habida cuenta de que la mayoría de los 45 textos legislativos contenían condiciones y procedimientos de aprobación que tenían gran interés para los Miembros, se habían notificado de conformidad con el artículo III del AGCS y la notificación se había hecho en inglés. Recordó que hasta la fecha habían presentado 35 notificaciones (y que las 10 restantes se presentarían en breve) y que esa labor requería importantes recursos de parte del Gobierno chino, particularmente recursos en tiempo. Posiblemente, la gran premura de tiempo había hecho imposible evitar inexactitudes o errores de traducción. A ese respecto, señaló que todas las versiones traducidas de la legislación notificada se habían realizado únicamente con fines de consulta y que la legislación sólo era auténtica en chino.

17. Dijo asimismo que se había establecido y se había notificado a la OMC el servicio de información para el comercio de servicios, según lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III del AGCS, y que se podían solicitar a dicho servicio las medidas de aplicación general relativas al comercio de servicios y las leyes, reglamentos y medidas administrativas pertinentes. Consideraba también que, fuera del marco del examen de transición, el servicio de información contribuía al mismo objetivo que el examen, es decir, el intercambio de información para facilitar a los Miembros información sobre el comercio de servicios en China. En cuanto a otras obligaciones de notificación en el marco del AGCS, informó al Consejo que China proseguía el proceso de verificación respecto de varios organismos administrativos en materia de servicios. La naturaleza prolija de esta labor y la prioridad que había concedido China al cumplimiento de los compromisos asumidos en relación con el acceso a los mercados y a la simplificación de la legislación no había hecho posible concluir todavía esa tarea. Prometió que China cumpliría las obligaciones de notificación dimanantes del AGCS y que se presentarían notificaciones una vez hubieran sido identificadas en ese proceso de verificación.

18. El representante recordó que desde la adhesión el Gobierno chino había desplegado un gran esfuerzo para cumplir los compromisos contraídos en el ámbito de los servicios. En primer lugar, se había promulgado una serie de nuevos reglamentos y normas administrativas que regían el comercio de servicios, para cumplir los compromisos de China en la OMC. Eran los siguientes: Reglamento de administración de las oficinas de representación de empresas extranjeras de servicios jurídicos en China; Reglamento de administración de empresas de telecomunicaciones con inversión extranjera; Medidas para la administración de empresas contractuales de distribución de productos audiovisuales con inversión de capital chino y extranjero; Normas sobre la administración de empresas internacionales de servicios de agentes expedidores con inversión extranjera; revisión del Reglamento de administración de las agencias de viajes; Reglamento del transporte marítimo internacional; y Disposiciones sobre la administración de la inversión extranjera en el sector del transporte por carretera. Afirmó que la amplia y detallada revisión de los reglamentos y normas administrativas pertinentes, con arreglo a los compromisos contraídos en la OMC, había consolidado el fundamento jurídico en que se basaba la mejora de las oportunidades de acceso a los mercados para los proveedores extranjeros de servicios.

19. En relación con el plazo de formulación de observaciones sobre dichos reglamentos y medidas administrativas, puso de relieve la difícil situación en la que se habían encontrado China en el proceso de simplificación legislativa y expresó su confianza de que los Miembros comprenderían tales dificultades. Por un lado, China había acelerado lo máximo posible la promulgación de esos

reglamentos y normas administrativas después de la adhesión para cumplir los compromisos en materia de acceso a los mercados que contenía el Protocolo de Adhesión. Por otro lado, con el fin de respetar el principio de transparencia, había utilizado todos los medios a su alcance para dar a los Miembros de la OMC, las empresas y los particulares la posibilidad de formular observaciones. Sin duda, China había aumentado las oportunidades de acceso a los mercados de los proveedores extranjeros de servicios desde la adhesión. El representante informó de que en los nueve primeros meses de 2002 se habían autorizado 24.771 empresas con inversión extranjera, lo que suponía un incremento del 33,36 por ciento con respecto al mismo período de 2001; la inversión contractual había ascendido a 68.400 millones de dólares EE.UU. y la inversión real a 40.000 millones de dólares EE.UU., con un aumento del 38,4 y el 22,5 por ciento en relación con el mismo período de 2001. Manifestó que las empresas de servicios de inversión recientemente autorizadas representaban una parte sustancial de esas cifras y que ése era un testimonio convincente de la liberalización creciente del mercado chino, incluso en el ámbito de los servicios. La observancia de los principios de transparencia y no discriminación había asegurado una mejora sustancial del clima inversor en China, que en 2002 ocupaba el primer lugar en el índice de confianza sobre la IED patrocinado por la firma Kearney.

20. Refiriéndose a los cambios introducidos desde la adhesión en materia de acceso a los mercados en algunos de los principales sectores de servicios, informó a los Miembros de que en la esfera de los servicios de distribución, en el primer semestre de 2002 se había autorizado a ocho empresas con inversión extranjera a abrir 28 cadenas de tiendas, incluidas Carrefour, con más de 30 cadenas de tiendas, y Walmart, con 22 puntos de venta en nueve ciudades. Con respecto a los servicios jurídicos, desde la adhesión se habían aprobado 17 nuevas oficinas de representación de empresas extranjeras de servicios jurídicos, con lo cual el número de oficinas había aumentado a 149, correspondientes a 17 Miembros. En cuanto a los servicios audiovisuales y conexos, desde la adhesión se había autorizado a dos salas de cine con inversión extranjera a suministrar servicios de proyección de películas y se había aprobado la primera empresa conjunta de distribución de productos audiovisuales. En relación con los servicios médicos, durante los últimos 18 meses se habían concedido 49 nuevas licencias a proveedores extranjeros de servicios en forma de empresas conjuntas con inversión de capital chino y extranjero o empresas conjuntas contractuales. En cuanto a los servicios de enseñanza, desde la adhesión se habían aprobado 36 escuelas y proyectos con participación china y extranjera, situando su número total en casi 700. Además de una empresa financiada con capital extranjero que había obtenido una licencia en telecomunicaciones, en la esfera del transporte por carretera se habían aprobado 30 empresas con inversión extranjera. Por último, en la esfera de los servicios de turismo, desde la adhesión se había autorizado una nueva agencia de viajes conjunta con inversión de capital chino y extranjero, con lo que el número de empresas aprobadas ascendía a 12. Todos esos hechos demostraban la sinceridad de China y su determinación de honrar los compromisos asumidos y ponían de manifiesto que los logros conseguidos desde la adhesión en materia de acceso a los mercados en el comercio de servicios debían ser objeto de un reconocimiento general.

21. El representante de China pasó a la segunda parte de su declaración y dijo que algunas de las preguntas que se habían planteado ponían de manifiesto una falta de comprensión de la legislación pertinente, las prácticas legislativas y el sistema administrativo chinos. A su parecer, algunas de las preguntas equivalían a peticiones de acceso a los mercados, que de hecho debían presentarse en la nueva ronda de negociaciones sobre el acceso a los mercados y no en el curso del examen.

22. En respuesta a la primera pregunta, referente a los servicios jurídicos, que pedía que se aclarara la definición de "informaciones sobre los efectos del régimen jurídico chino", afirmó que el artículo 15 del Reglamento de administración de las oficinas de representación de empresas extranjeras de servicios jurídicos en China establecía que las oficinas de representación y sus representantes sólo podían desarrollar actividades que no comprendieran asuntos jurídicos chinos. En las Normas de aplicación se mencionaban seis actividades que se consideraban "asuntos jurídicos chinos". Dichas Normas se habían formulado de conformidad con lo indicado en su lista en relación

con los servicios jurídicos, en la que se excluía la práctica del derecho chino de la descripción contenida en el epígrafe 861 de la CPC. Recordó también que los servicios jurídicos requerían una formación específica y que la mayoría de los países reconocían que solamente los abogados habilitados para ejercer podían suministrar servicios jurídicos en el país en el que obtenían su certificado. Por último, señaló que China, tomando en consideración la práctica habitual en el ámbito de los servicios jurídicos internacionales y la necesidad de asegurar que los servicios jurídicos extranjeros fueran de gran calidad, había definido los "asuntos jurídicos chinos" dentro de un ámbito determinado. China permitía que las oficinas de representación de despachos de abogados extranjeros suministraran servicios relacionados con tratados internacionales, prácticas internacionales, operaciones comerciales internacionales y derecho extranjero en asuntos que correspondían a la jurisdicción del derecho chino. Así se establecía en el artículo 33 de las Normas de aplicación, que disponía que las oficinas de representación no debían emitir opiniones ni juicios sobre la aplicación del derecho chino en ningún asunto concreto cuando se les pidiera que suministraran información sobre los efectos del régimen jurídico chino. Esa disposición de las Normas se basaba en el hecho de que el epígrafe 861 de la CPC no abarcaba los asuntos jurídicos chinos; confirmaba la situación existente en China antes de la adhesión, que permitía que las oficinas de representación y sus abogados facilitaran gratuitamente información acerca de los efectos del régimen jurídico chino a clientes no específicos en relación con sus empresas y servicios, y significaba que al facilitar información sobre el efecto del régimen jurídico chino, los abogados extranjeros y sus oficinas de representación no podían emitir opiniones ni dictámenes jurídicos sobre la aplicación de la ley de la República Popular China. El orador dijo que las Normas no contradecían los compromisos asumidos por China y que se había consultado esa disposición con los abogados extranjeros que ejercían en China, que entendían que significaba que la información que pudieran facilitar sobre los efectos del régimen jurídico chino no debía incluir interpretaciones del derecho chino.

23. Respondiendo a la segunda pregunta sobre los servicios jurídicos, que pedía aclaraciones sobre los abogados chinos inscritos en el registro nacional y sobre la cooperación entre las oficinas de representación y los abogados chinos, señaló que el artículo 16 del Reglamento disponía que "las oficinas de representación no podrán emplear a abogados en ejercicio chinos; sus empleados no prestarán servicios jurídicos a clientes", y que las Normas de aplicación contenían disposiciones más detalladas. Esa disposición del Reglamento se basaba, en primer lugar, en la anotación de la Lista de China de que "la oficina de representación no empleará (...) a abogados chinos inscritos en el registro nacional". El sentido de la expresión "abogados chinos inscritos en el registro nacional" se había precisado en el informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de China como "ciudadanos chinos que habían obtenido un título de abogado y estaban en posesión de un permiso chino para ejercer y lo hacían en una empresa de servicios jurídicos china". En segundo lugar, el orador dijo que la Lista de Compromisos Específicos de China a) solamente permitía a las oficinas de representación establecer una relación de cooperación mercantil con empresas chinas de servicios jurídicos, según la práctica habitual de las oficinas de representación que establecen relaciones de cooperación regulares y a largo plazo con empresas chinas de servicios jurídicos; b) contemplaba el requisito de la Ley de Abogacía de China de que los abogados chinos deben ejercer su profesión como miembros de un despacho de abogados chino y que un abogado será inhabilitado en caso de que abandone una empresa de prestación de servicios jurídicos; c) permitía que en determinados casos la oficina de representación pudiera dar instrucciones directas a un abogado chino cuando existiera un acuerdo previo con la empresa china de servicios jurídicos, en el entendimiento de que en tal caso, el abogado chino no podía prestar servicios jurídicos como empleado de la oficina de representación, en nombre de la oficina. Esas disposiciones no vulneraban los compromisos asumidos por China en la OMC.

24. En respuesta a la solicitud de que se aclararan las cuestiones relativas al trato NMF, el representante dijo que el artículo 34 del Reglamento establecía que "el departamento de administración judicial del Consejo de Estado formulará por separado medidas para la administración de las oficinas de representación establecidas en China por empresas de servicios jurídicos de los territorios aduaneros distintos, de conformidad con los principios del presente Reglamento", e incluía una cierta diferenciación en el texto que tenía en cuenta el retorno de Hong Kong y Macao a China.

Por esa razón, el Ministerio de Justicia había promulgado el 13 de marzo de 2002 el Reglamento para la administración de las oficinas de representación de empresas de servicios jurídicos de las regiones administrativas especiales de las RAE de Hong Kong y Macao, cuyo contenido sustantivo era el mismo que el del Reglamento aplicable a China y, en consecuencia, no suponía un problema desde el punto de vista del trato NMF.

25. En relación con la primera pregunta referente a los servicios de mensajeros, que se centraba en las medidas más recientes sobre su administración, respondió que en el caso de las empresas de servicios de agentes expedidores con inversión extranjera que suministraban servicios de mensajeros para la entrega de cartas y otro tipo de correspondencia, el registro del encargo ante la Administración Postal era una cuestión de procedimiento. El registro del encargo no era una segunda autorización, pues las autoridades postales emitían un certificado de encargo que contenía información sobre la duración y el alcance de la actividad compatible con la emisión del certificado por el Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica (que excluía los documentos políticos, oficiales y militares). Además, las empresas de servicios de agentes expedidores con inversión extranjera que no suministraban servicios internacionales de mensajeros para la entrega de cartas y otro tipo de correspondencia no estaban sujetas al procedimiento de encargo. Cuando una empresa de servicios de agentes expedidores con inversión extranjera presentaba la solicitud de encargo, sus sucursales, ya establecidas o nuevas, no necesitaban seguir de nuevo el procedimiento de encargo. A ese respecto, recordó el párrafo 7 de la Declaración de Doha, que reafirmaba el derecho que asistía a los Miembros en virtud del AGCS de reglamentar el suministro de servicios y establecer nuevas reglamentaciones al respecto.

26. En respuesta a la preocupación que se había expresado acerca de la independencia del órgano de reglamentación, observó que en el sistema postal chino, la Administración Postal de China se desempeñaba como operador y regulador, y que así se reflejaba en el párrafo 309 de informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de China en el que se indicaba que "las autoridades de reglamentación pertinentes serían ajenas a los proveedores de servicios por ellas reglamentados, y tampoco podrían depender de ellos, excepto en el caso de los servicios de transporte por ferrocarril y de correo". El orador informó a los Miembros de que China estaba estudiando intensamente e impulsando el proceso de establecer un órgano de reglamentación independiente para los servicios de mensajeros, pero reiteró que cada Miembro de la OMC tenía una situación diferente y, por tanto, le asistía el derecho de definir el contenido de los servicios públicos y de reformar su propio sector público. Afirmó que el modelo vigente de reglamentación de los servicios postales de China debería ser plenamente respetado por los demás Miembros de la OMC.

27. Refiriéndose a la primera pregunta sobre los servicios de telecomunicaciones, que hacía referencia al trámite de licencias y al requisito relativo al capital mínimo, el representante respondió que todas las empresas podían solicitar licencias para prestar servicios de telecomunicaciones de conformidad con las prescripciones y procedimientos del Reglamento de la República Popular China en materia de telecomunicaciones, las disposiciones de la Administración de empresas de telecomunicaciones con inversión extranjera y las Medidas administrativas sobre la concesión de licencias para la explotación de servicios de telecomunicaciones. Señaló que para establecer una empresa de telecomunicaciones con inversión extranjera con miras al suministro de servicios en China, el principal inversor chino, una vez que hubiera obtenido el informe de examen sobre la explotación de servicios de telecomunicaciones por empresas con inversión extranjera y el certificado de autorización para el establecimiento de una empresa con inversión extranjera, tenía que presentar una solicitud al organismo del Consejo de Estado competente en materia de telecomunicaciones. El plazo establecido para el examen de la solicitud era de 180 días para los servicios de telecomunicaciones básicas y de 60 días para los servicios de telecomunicaciones con valor añadido. Una vez aprobada la solicitud, se expedía la licencia. El sector de las telecomunicaciones era intensivo en capital y exigía economías de escala y una gran cualificación profesional. Por otra parte, los servicios de telecomunicaciones se suministraban al público en general y se exigía que el suministrador del servicio tuviera fondos suficientes para establecer una red operativa, un número

suficiente de profesionales capacitados para el desarrollo de la actividad, y la capacidad y solvencia necesarias para garantizar la prestación del servicio a largo plazo. De esa forma se aseguraba la calidad de los servicios y la protección de los derechos de los consumidores. El capital mínimo necesario de las empresas con inversión extranjera para suministrar servicios de telecomunicaciones básicas y con valor añadido, que se determinaba en las Disposiciones sobre la administración de empresas de telecomunicaciones con inversión extranjera, era el mismo que se exigía a las empresas nacionales.

28. En respuesta a la preocupación expresada sobre la independencia del órgano de reglamentación señaló que la prescripción que establecía el documento de referencia sobre las telecomunicaciones era que "el órgano de reglamentación será independiente de todo proveedor de servicios de telecomunicaciones básicas, y no responderá ante él. Las decisiones del órgano de reglamentación y los procedimientos aplicados serán imparciales con respecto a todos los participantes en el mercado". En ese sentido, dijo que con la creación del Ministerio de la Industria de la Información en 1998 se había separado el órgano de reglamentación de la actividad de explotación. El Ministerio había renunciado a todas las funciones de gestión de todas las empresas y desarrollaba su labor de reglamentación de forma imparcial, equitativa y transparente y actuaba como regulador independiente.

29. Por último, refiriéndose a la cuestión del servicio universal, el representante afirmó que el Reglamento sobre Telecomunicaciones de la República Popular China establecía que los operadores de telecomunicaciones debían cumplir las obligaciones de servicio universal pertinentes con arreglo a las leyes y reglamentos correspondientes. El objetivo inmediato de la obligación de servicio universal se centraba en los servicios de voz y el organismo de telecomunicaciones del Consejo de Estado definía la obligación de servicio universal en materia de telecomunicaciones mediante designación o concurso público. Las normas administrativas sobre compensación de costos del servicio universal de telecomunicaciones serían establecidas por las autoridades financieras conjuntamente con los organismos del Consejo de Estado encargados de las telecomunicaciones y la fijación de precios, aunque en el momento presente esos organismos estaban procediendo a estudiar y redactar normas administrativas. China esperaba fomentar la comunicación y cooperación con otros Miembros y aprender de su experiencia con el fin de establecer métodos científicos y razonables de compensación de costos para el servicio universal de telecomunicaciones.

30. Respondiendo a la primera pregunta sobre los servicios de distribución y de logística referente al alcance de la actividad de las empresas de logística, el representante dijo que en virtud de la política relativa a las actividades experimentales contenida en el Aviso sobre el establecimiento de empresas de logística con inversión extranjera en regiones experimentales, se habían fomentado dos categorías de actividades internacionales en materia de logística. La primera era la logística de la distribución internacional basada en las transacciones transfronterizas, que comprendía la actividad de importación y exportación y los servicios conexos en relación con la importación y exportación de mercancías realizadas de forma independiente o en calidad de agente. Comprendía también los servicios de agentes expedidores para la importación y exportación de mercancías mediante transporte marítimo, aéreo, por carretera y por ferrocarril. La segunda categoría era la logística de terceros con alta tecnología y una gestión avanzada, que comprendía el transporte, almacenamiento, carga y descarga, elaboración, envasado, entrega de productos generales por carretera, servicios conexos de elaboración de información y de consultoría, servicios nacionales de agentes expedidores y logística administrada y gestionada mediante redes de ordenadores. Esas dos categorías, antes que establecer una distinción estricta entre distintos tipos de logística, servían únicamente para orientar el desarrollo que fomentaba el Gobierno.

31. En respuesta a una segunda pregunta sobre esa cuestión, referente a las limitaciones geográficas y la concesión de licencias, el representante dijo que las empresas de logística con inversión extranjera se podían establecer en las zonas experimentales de Jiangsu, Zhejiang, Guangdong, Beijing, Tianjin, Chongqing, Shanghai y Shenzhen, en las que existía una mayor

concentración de capital extranjero. Las empresas ya existentes o nuevas de esas zonas podían acogerse a la política relativa a las actividades experimentales en tanto en cuanto cumplieran los requisitos. Las empresas dedicadas a uno o varios aspectos de la actividad de logística podían proseguir sus actividades sin verse afectadas por esa política. Si las empresas cumplían los requisitos establecidos en la política relativa a las actividades experimentales, podían solicitar que se ampliara el alcance de su actividad.

32. Por último, refiriéndose a una pregunta sobre la reglamentación y los procedimientos de autorización en los servicios de transporte marítimo, el representante recordó que el Reglamento del transporte marítimo internacional había sido promulgado el 11 de diciembre de 2001 y había entrado en vigor el 1º de enero de 2002 y que, con objeto de facilitar su aplicación, se estaban preparando y revisando Normas de aplicación sobre la base de sugerencias y observaciones que se habían recabado a la opinión pública. El representante manifestó que las Normas estaban muy avanzadas y que esperaba que fueran promulgadas a comienzos de 2003, y reiteró que las reglamentaciones y las Normas eran conformes a los compromisos contraídos por China en la OMC. En relación con esas Normas de aplicación, dijo que especificarían más detalladamente las disposiciones sobre el transporte marítimo internacional y sobre los servicios auxiliares, incluso la definición de compañías navieras internacionales como compañías que prestaban servicios de transporte marítimo internacional de mercancías y/o pasajeros en buques que eran de su propiedad o que explotaban. Los artículos 5 y 6 del Reglamento, relativos al funcionamiento de los servicios marítimos internacionales, se aplicaban exclusivamente a las compañías navieras internacionales registradas en China y no eran aplicables a empresas extranjeras. Las Normas de aplicación también definirían una serie de proveedores de servicios marítimos auxiliares, como las empresas de servicios de agencias marítimas, las empresas internacionales de gestión naviera, las empresas internacionales de almacenamiento de la carga objeto de transporte marítimo y las empresas marítimas internacionales de estaciones y depósitos de contenedores. Ni el Reglamento ni sus Normas de aplicación se referían a los servicios de agentes expedidores, que estaban reglamentados por las normas que rigen los servicios de agentes expedidores.

33. El representante de China expresó su confianza en que la información que había facilitado al Consejo con antelación a la reunión y la exposición que había hecho permitirían a los Miembros comprender mejor los esfuerzos y los logros de China en la aplicación de sus compromisos en la esfera del comercio de servicios. China consideraba que el examen era un foro adecuado para realizar aclaraciones e intercambiar información, que daría resultados constructivos y positivos.

34. El representante de los Estados Unidos agradeció a la delegación china la intensa labor realizada en relación con la aplicación y con la declaración, que contenía información pertinente. Expresó, sin embargo, su decepción por el hecho de que su delegación no había recibido la información contenida en la declaración verbal con antelación a la reunión, según lo dispuesto en la sección 18 del Protocolo de Adhesión. Era difícil seguir en detalle la declaración, pues requería un examen pormenorizado.

35. En relación con los servicios jurídicos, subrayó las importantes preocupaciones que no se abordaban en las respuestas de China. El artículo XVI del AGCS prohibía a los Miembros imponer una prueba de necesidades económicas (PNE) cuando existía un compromiso de acceso a los mercados, como ocurría en el caso de China con respecto a los servicios jurídicos. Al parecer, las nuevas normas permitirían al Ministerio de Justicia determinar en función de la demanda si era necesaria una oficina de representación. El orador pidió que China confirmara que el AGCS impedía establecer una PNE y explicara cómo interpretaba el párrafo 3 del artículo 7 del Reglamento y el artículo 4 de las Normas de aplicación a ese respecto. Señaló también que las nuevas normas contenidas en el Reglamento parecían imponer nuevos límites cuantitativos a las oficinas de representación extranjeras. Por ejemplo, el artículo 10 de las Normas de aplicación disponía que deberían transcurrir tres años desde que hubiera comenzado la actividad de la oficina de representación de un despacho de abogados extranjeros más recientemente establecida para que se



podiera solicitar autorización para abrir otra oficina de representación. Habida cuenta de que China se había comprometido en el Acuerdo de Adhesión a eliminar todos los límites cuantitativos antes del 11 de diciembre de 2002, preguntó qué medidas pensaba adoptar China para suprimir las restricciones cuantitativas en las nuevas Normas de aplicación. En tercer lugar, el representante afirmó que existía una discrepancia en el plazo establecido para que las autoridades examinaran la solicitud de establecer una nueva oficina extranjera de representación, que era de nueve meses para los proveedores extranjeros, pero de sólo 30 días para los nacionales, y preguntó por qué no se aplicaba el plazo de 30 días a todos los proveedores. Se refirió también a las actividades que podían desempeñar las empresas de servicios jurídicos extranjeras y dijo que, a pesar de la respuesta de China, parecía que la nueva reglamentación contenida en las Normas de aplicación imponía limitaciones a las actividades de las oficinas de representación más restrictivas que las establecidas en la Lista de servicios de China, o prohibía actividades que anteriormente podían desarrollar las empresas extranjeras. El orador pidió que China hiciera un comentario sobre esa cuestión.

36. En relación con los servicios de telecomunicaciones, señaló que China había afirmado que el Ministerio de la Industria de la Información era el organismo regulador independiente, pero, de hecho, ese Ministerio no estaba totalmente separado, ni estructural ni financieramente, de todos los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones. El orador pidió que se aclarara si era o no así.

37. Con respecto a los servicios de mensajeros y de entrega urgente, encomió los esfuerzos desplegados por China para mitigar la preocupación de los Estados Unidos, pero señaló que sería difícil que, desde un punto de vista estructural, la Administración Postal desarrollara por separado las actividades de regulador y competidor de otros servicios de mensajeros y añadió que habría sido deseable que se hubiera adoptado un mecanismo para que la Administración Postal no actuara como órgano de reglamentación. En respuesta a la aclaración de China sobre los tipos de servicios en que podían intervenir los proveedores de servicios de entrega urgente, pidió más aclaraciones sobre la definición de "otro tipo de correspondencia" y elogió la intensa labor que había desarrollado el Gobierno de China sobre esa cuestión.

38. En cuanto a la logística, dijo que a efectos de la OMC no era un término definido y no estaba claro el alcance real de la expresión según su utilización en la reglamentación, aunque al parecer incluía varios tipos de servicios respecto de los cuales China había asumido compromisos en su Lista; la reglamentación aplicable debía estar en conformidad con los compromisos asumidos por China en la esfera de la logística. El orador agradeció a China el esfuerzo realizado para definir el alcance de esos servicios.

39. Refiriéndose a los servicios financieros, reiteró la preocupación que habían manifestado los Estados Unidos en sus preguntas y la que se expresaba en el informe del Comité respecto del calendario para la adopción de la reglamentación definitiva en los ámbitos de los seguros y la financiación los vehículos automóviles. Afirmó que, en el caso de los seguros, los Estados Unidos habían considerado positiva la disposición de las autoridades chinas de examinar estructuras alternativas de capitalización que contribuyeran a mejorar el entorno cautelar y facilitar un mayor acceso al mercado.

40. El representante del Japón agradeció a China su explicación, sus esfuerzos y su contribución respecto de las notificaciones y otra información, que el Japón no había podido examinar detenidamente al haber sido distribuida inmediatamente antes de la reunión. A ese respecto, pidió que, en aras de la transparencia, facilitara más información por escrito y pidió que distribuyera su declaración. Después de haber escuchado las respuestas de la delegación de China a las preguntas formuladas por el Japón sobre los servicios de mensajeros, los servicios de envío por correo de paquetes de documentos (especialmente, en relación con el párrafo 4, referente a los derechos adquiridos de los proveedores extranjeros) y la reglamentación sobre la correspondencia excluida de esos servicios, incluso en el caso de que hubiera un encargo, pidió que se dieran más explicaciones.

41. En cuanto a los servicios de distribución, refiriéndose a los puntos planteados en los párrafos 5 y 6 de la comunicación del Japón, expresó su preocupación sobre la Lista de China, en relación con la liberalización de la distribución de diversos productos como el petróleo transformado y en bruto y los vehículos automóviles, así como sobre la restricción de la venta de vehículos automóviles por agentes minoristas.

42. Con respecto a los servicios de transporte, el representante agradeció a China sus explicaciones sobre el transporte marítimo, los servicios de logística y los servicios de agentes expedidores. Ante las ambigüedades existentes en las diferentes reglamentaciones con respecto a las distintas categorías, anunció la posibilidad de volver sobre esos asuntos para recabar más información. Refiriéndose a las preguntas sobre el transporte marítimo, el sistema de descuento y las tasas de utilización de las instalaciones portuarias que figuraban en los párrafos 7 y 8 de la comunicación del Japón, dijo que China no había abordado esos puntos y pidió más información. En relación con los párrafos 9 y 10, agradeció a China sus explicaciones e indicó que volvería sobre esas cuestiones. En cuanto al párrafo 12, en el que se hacía referencia al derecho a comerciar, pidió que China diera más explicaciones.

43. Dijo que de los comentarios de China se desprendía que se encontraba en el proceso de incorporar las obligaciones contraídas en la OMC en su estructura administrativa y elogió los esfuerzos que había realizado. Afirmó que la transparencia era esencial en ese proceso y expresó su confianza en que China intensificaría esos esfuerzos dando a los Miembros interesados y al sector privado la posibilidad de formular observaciones sobre las nuevas normas y reglamentos. A continuación, expresó el deseo del Japón de proseguir un intercambio constructivo de puntos de vista con el Gobierno chino para asegurar que prevalecieran la transparencia y un mercado abierto, en aras del cumplimiento de las normas de la OMC.

44. El representante de las Comunidades Europeas agradeció a China las detalladas respuestas que había facilitado, pero lamentó no haberlas recibido con antelación, pues ello había dificultado su examen pormenorizado. A continuación, pidió que se facilitara una copia de la declaración de China. El orador elogió los esfuerzos realizados por China para cumplir las obligaciones derivadas de su adhesión, pero indicó que algunos elementos de ese proceso eran motivo de preocupación, por ejemplo, la falta general de transparencia en el proceso de aplicación. En cuanto a las reglamentaciones específicas, dijo que existían disposiciones poco claras y ambiguas, lo que dificultaba su comprensión y el establecimiento de un entorno comercial previsible. A continuación indicó su intención de centrarse en algunos elementos más específicos derivados de las preguntas formuladas por las CE, sobre las que esperaba que China facilitara más información.

45. Refiriéndose a las preguntas planteadas por las CE sobre las telecomunicaciones, que no habían sido abordadas en su totalidad, solicitó más información sobre la interconexión y sobre la reglamentación adoptada en diciembre de 2001 en relación con las empresas extranjeras de telecomunicaciones y preguntó si esa reglamentación relativa a las empresas con inversión extranjera era aplicable también a las empresas chinas de telecomunicaciones que cotizaban en los mercados de valores extranjeros. Preguntó asimismo cuál era el órgano encargado de administrar la participación del Estado en las empresas de telecomunicaciones.

46. En relación con los abogados extranjeros, reiteró que las repreguntas de los Estados Unidos figuraban en la comunicación inicial de las CE.

47. Con respecto a los servicios de mensajeros, el representante dijo que las CE habían tomado nota de las respuestas facilitadas y confiaban en ver mitigadas sus preocupaciones.

48. En cuanto a los servicios financieros, dijo que las CE tenían preocupaciones, tanto acerca de los servicios bancarios como de los seguros, particularmente sobre el establecimiento de sucursales y otras cuestiones como las tasas de capitalización de las compañías de seguros. El orador expresó el

interés de las CE de abordar esos y otros aspectos de sus comunicaciones a lo largo de los próximos días.

49. El representante del Taipei Chino se refirió a la labor realizada para preparar la declaración, mediante la cual se había procurado dar respuesta a las preguntas y observaciones que habían planteado la suya y otras delegaciones. No obstante, al no haber recibido la declaración verbal en forma escrita con antelación, no tenía la seguridad de que se hubieran abordado todas las preocupaciones que había expresado su delegación y pidió que se distribuyera una copia de la declaración de China. Con respecto al turismo, consideraba necesario determinar qué aspectos podía haber incumplido China en su aplicación del Protocolo de Adhesión y manifestó que la aplicación de los compromisos redundaba en beneficio de todos los Miembros, incluida China.

50. El representante de Australia elogió la intensa labor que había llevado a cabo China para aplicar sus compromisos en la esfera de los servicios. En el ámbito de los servicios jurídicos, refiriéndose a las determinaciones del Ministerio de Justicia sobre la aplicación del Reglamento de administración de las oficinas de representación, dijo que establecía nuevas limitaciones a los abogados extranjeros en ejercicio en China. Australia necesitaría más tiempo para estudiar las respuestas de China y tal vez formularía nuevas preguntas. A continuación, pidió que China distribuyera su declaración.

51. El representante del Pakistán expresó su sincero agradecimiento a China por las respuestas detalladas y completas a las preguntas formuladas. Consideraba que a pesar de que se le habían impuesto unas obligaciones onerosas y sin precedentes, China había respondido adecuadamente y expresó la plena satisfacción del Pakistán. El orador reiteró el reconocimiento de su delegación de los esfuerzos desplegados por China para cumplir sus obligaciones y expresó el deseo de una conclusión satisfactoria del examen.

52. El representante del Canadá reconoció el importante esfuerzo que había hecho China para preparar su comunicación y, en particular, la de la legislación correspondiente al examen. Afirmó que el Canadá compartía las preocupaciones que habían expresado otras delegaciones en relación con los servicios jurídicos, especialmente en lo que se refería a las evidentes limitaciones geográficas y cuantitativas al establecimiento. Necesitaba más tiempo para estudiar detenidamente las respuestas de China y la posibilidad de formular preguntas adicionales y pidió que se distribuyera la declaración y una lista de los funcionarios y ministerios presentes en la reunión.

53. La representante de Cuba agradeció a China sus detalladas respuestas sobre los mecanismos establecidos para cumplir sus compromisos y recordó que la adhesión a la OMC entrañaba dificultades debido a las modificaciones legislativas y administrativas necesarias y a las notificaciones, todo lo cual exigía un esfuerzo ingente. La declaración de China daba fe de su firme decisión de cumplir las obligaciones que había contraído. Cuba expresó su satisfacción por las respuestas e instó a otros Miembros a no plantear peticiones que desbordaran los compromisos de China. La oradora felicitó a China y señaló que la nutrida delegación presente en la reunión demostraba la firmeza del compromiso de China con la OMC.

54. El representante del Uruguay expresó su gratitud a varias delegaciones por su participación en ese proceso y a China por la intensa labor que comportaba el cumplimiento de sus compromisos derivados de la adhesión a la OMC. Subrayó que, al igual que en otros órganos, todas las declaraciones efectuadas deberían figurar en el acta oficial de la reunión y que se podría preparar un informe fáctico, al que se adjuntaría el acta, para el examen de transición que llevaría a cabo en diciembre el Consejo General.

55. La Presidenta recordó que varias delegaciones habían pedido que China distribuyera su declaración y que facilitara una lista de los integrantes de la delegación. Tomó nota del gran número de preguntas y peticiones de aclaraciones sobre los servicios jurídicos, las telecomunicaciones, los

servicios de mensajeros, el transporte y servicios conexos, los servicios de turismo y la cuestión del derecho a comerciar.

56. El representante de China agradeció a las delegaciones sus observaciones positivas, sus buenos deseos y las preguntas adicionales. En respuesta a la petición de que se facilitara la declaración de China, confirmó que se haría llegar a la Secretaría para su distribución al Consejo. Con respecto a la posibilidad de establecer nuevos contactos con funcionarios chinos, dijo que los funcionarios de la capital permanecerían en Ginebra hasta el 2 de noviembre y que estarían disponibles para mantener ese tipo de contactos, en el entendimiento de que tendrían lugar fuera del marco del mecanismo de examen de transición.

57. Respondiendo a las observaciones referentes a los servicios financieros, afirmó que ese mecanismo de examen de transición se había completado a comienzos de la semana en el seno del Comité de Servicios Financieros y que no volvería sobre esa cuestión hasta el examen del año siguiente, aunque continuaría estando abierto a discutir con los Miembros esos asuntos en otras ocasiones. En vista de las cuestiones complementarias que se habían formulado, consideraba que se habían abordado las principales preocupaciones, pero de todas formas trataría de responder a las preguntas escritas y orales pendientes.

58. En respuesta a la primera pregunta sobre los servicios jurídicos relacionada con la transparencia y la posibilidad de que el público pudiese hacer observaciones, dijo que, según la cláusula C del artículo 2 del Protocolo de Adhesión, China había cumplido estrictamente los requisitos de transparencia al redactar el Reglamento de administración de las oficinas de representación de empresas extranjeras de servicios jurídicos en China (en lo sucesivo "Reglamento") y el Reglamento del Ministerio de Justicia sobre la aplicación de ese Reglamento (en lo sucesivo "Normas de aplicación"). Antes de promulgar y aplicar el Reglamento se habían mantenido reuniones con representantes de empresas de servicios jurídicos extranjeras para recabar observaciones. Por ejemplo, con antelación a la reunión, en abril y mayo de 2002, se habían cursado invitaciones a las oficinas de representación para que hicieran observaciones sobre cuestiones de interés y ello se había hecho en lugares como Beijing, Shanghai y Guangzhou, donde estaban ubicadas la mayor parte de las oficinas. En el mes de agosto se habían celebrado nuevas reuniones con oficinas de representación de Shanghai y Beijing para recabar sus comentarios.

59. En cuanto a la duración del procedimiento de examen y aprobación, explicó que el plazo de nueve meses que figuraba en el Reglamento se había establecido teniendo en cuenta el tiempo real que se necesitaba para completar un procedimiento de examen y aprobación para el establecimiento de oficinas de representación. Ese plazo era el tiempo necesario para el trámite de la solicitud, que comprendía la recepción de los documentos; las formalidades previas al examen; la obtención de lista completa de documentos y la determinación de su autenticidad; la confirmación de la validez de los títulos de aptitud y las certificaciones; el envío de avisos para la presentación de documentos adicionales; y la comprobación de que los documentos habían sido debidamente autenticados y certificados. El plazo para aumentar el número de representantes o el número de empleados no superaría los 30 días hábiles desde el momento en que los dos niveles de autoridades que tramitaban el asunto recibían una solicitud completa con documentos para su examen.

60. En el deseo de aclarar la cuestión de las limitaciones geográficas o el plazo requerido para el establecimiento de oficinas de representación adicionales, dijo que en el apartado 1 del artículo 10 de las Normas de aplicación se estipulaba que para poder establecer nuevas oficinas de representación las oficinas de representación de empresas extranjeras de servicios jurídicos establecidas en China debían haber desarrollado su actividad durante tres años consecutivos. Al establecer ese requisito se habían tenido en cuenta dos factores. En primer lugar, la situación interna era diferente, pues a las oficinas chinas se les exigía que hubieran desarrollado la actividad durante cuatro años consecutivos. En segundo lugar, en el transcurso de los 10 últimos años, la experiencia de las oficinas extranjeras de representación en China había puesto de manifiesto que normalmente llevaba tres años obtener una

licencia, comenzar la actividad y administrar regularmente la oficina. En consecuencia, las empresas extranjeras de servicios jurídicos necesitaban un período transitorio antes de poder abrir nuevas oficinas. El orador dijo que algunas oficinas de representación no podían ampliar su actividad después de su establecimiento y que otras no llegaban a abrirse después de haber obtenido la autorización, pese a lo cual, un número considerable de dichas oficinas solicitaban autorización para establecer oficinas adicionales, lo cual parecía poco razonable. El requisito de los tres años no era una limitación cuantitativa, sino una medida administrativa.

61. En relación con la cuarta pregunta referente a la aclaración de las limitaciones impuestas a los representantes, respondió que el artículo 18 del Reglamento disponía que el representante de una oficina de representación no podía actuar como tal, ni a tiempo completo ni a tiempo parcial, en dos o más oficinas al mismo tiempo. Al establecer esa prescripción se habían tenido en cuenta dos factores. En primer lugar, esa misma norma se aplicaba a los representantes chinos de los despachos de abogados en virtud del apartado 3 del artículo 5 del Reglamento. Las medidas promulgadas por el Ministerio de Justicia sobre las oficinas de representación establecían que las oficinas de representación de empresas chinas de servicios jurídicos debían contar con tres o más abogados en cada filial y que un abogado chino no podía ser representante a tiempo completo o a tiempo parcial en dos o más oficinas de representación. En segundo lugar, la prescripción consistía en que se debía designar a un representante distinto para cada oficina de representación de los despachos de abogados extranjeros. El representante de un despacho de abogados en una oficina de Beijing podía ejercer la abogacía al mismo tiempo en otras oficinas de representación de ese despacho en China y podía agregar el tiempo de ejercicio profesional en diferentes oficinas en China.

62. En respuesta a la pregunta relativa a las pruebas de necesidades económicas, respondió que el apartado 3 del artículo 7 del Reglamento disponía que cuando una empresa extranjera de servicios jurídicos solicitaba establecer una oficina de representación en China se debía cumplir el requisito de que existiera una necesidad real de servicios jurídicos. En las Normas de aplicación se podía encontrar información más detallada. A tal efecto se habían tenido en cuenta los siguientes factores. En primer lugar, el principio cautelar según el cual solamente la prestación de servicios jurídicos con amplios conocimientos y experiencia podía proteger los derechos e intereses de los consumidores, y por ello era importante comprobar que las empresas extranjeras de servicios jurídicos prestaban servicios de gran calidad a los clientes chinos, para lo cual se tenían en cuenta los títulos de aptitud, la trayectoria en la prestación de servicios jurídicos y la demostración de la capacidad profesional. En segundo lugar, la disposición estaba relacionada con una necesidad económica y la demanda real de servicios jurídicos en diferentes zonas de China. Existía un desequilibrio en el crecimiento económico de las diferentes partes del país y el nivel de los servicios jurídicos entre las distintas zonas y regiones también era diferente. El mercado global de servicios jurídicos no había madurado, no se había avanzado en la ordenación del mercado y no se había establecido un mecanismo de servicios adecuado. Por consiguiente, las autoridades chinas habían actuado de forma responsable al cumplir su cometido de establecer como referencia para los solicitantes extranjeros el nivel del crecimiento económico y la necesidad real en materia de servicios jurídicos.

63. Con respecto a la aplicación del derecho chino en las actividades de arbitraje, dijo que las Normas de aplicación consideraban que un agente que emitiera una opinión u observación sobre la aplicación del derecho chino o sobre determinados hechos que implicaran normas legislativas chinas en su condición de agente en el curso de actividades de arbitraje estaba ejerciendo el derecho chino. Las razones eran las siguientes. En primer lugar, esa disposición no prohibía a los abogados y oficinas extranjeros participar en actividades de arbitraje en China en su condición de agentes ni les impedía ocuparse de asuntos de arbitraje racionados con la aplicación del derecho chino, sino que establecía un límite a la posibilidad de emitir opiniones o comentarios sobre la aplicación del derecho chino, así como en relación con los actos o sucesos que se regían por el derecho chino en las actividades de arbitraje. En segundo lugar, en la Lista de compromisos específicos de China se había establecido de forma explícita que en relación con el epígrafe 861 de la CPC los abogados extranjeros no podían ejercer el derecho chino. En tercer lugar, era práctica común de algunos Miembros de

la OMC prohibir a los abogados extranjeros emitir opiniones u observaciones sobre el derecho del país anfitrión.

64. En cuanto a la cuestión de la renovación del registro de las empresas extranjeras de servicios jurídicos que desarrollaban actividades en China a título experimental, respondió que esa prescripción, que figuraba en el artículo 35 del Reglamento, era básicamente un procedimiento de registro que no afectaría a la actividad de las oficinas de representación extranjeras y, en consecuencia, no conculcaba derechos adquiridos. Con respecto a las tasas que había que pagar en renminbi (la moneda nacional), dijo que con arreglo a los reglamentos pertinentes de la administración de divisas, aplicables a todos los proveedores extranjeros de servicios, en China, todos los derechos y tasas debían pagarse en renminbi.

65. Refiriéndose a los servicios de mensajeros y a la cuestión del plazo de las solicitudes de encargo, indicó que se había establecido el 5 de noviembre de 2002, es decir, 60 días después la publicación del aviso suplementario.

66. En relación con los servicios de telecomunicaciones y los servicios de portales internacionales, dijo que durante las negociaciones de adhesión y en los documentos jurídicos definitivos China no había asumido el compromiso de abrir los servicios de portales internacionales, sino que exigía que todos los servicios internacionales se suministraran a través del portal internacional autorizado por el Ministerio de la Industria de la Información.

67. Respecto del órgano de reglamentación, el representante afirmó que por autoridad encargada de la industria de la información dependiente del Consejo de Estado se entendía el MII. El organismo encargado de la administración de las telecomunicaciones en las provincias, regiones autónomas y municipios era el órgano de reglamentación de las telecomunicaciones en la jurisdicción respectiva. El MII supervisaba y administraba el sector de las telecomunicaciones a escala nacional y el órgano provincial de reglamentación lo hacía en su región respectiva bajo la dirección del MII.

68. En cuanto a la transparencia de las leyes y reglamentos y las cuestiones generales de los servicios de telecomunicaciones, dijo que al preparar y redactar las leyes y reglamentos sobre telecomunicaciones el MII había recabado las opiniones de empresas de comunicaciones y otras entidades pertinentes y los había modificado y mejorado teniendo en cuenta las observaciones de las distintas partes. Con respecto al procedimiento de concesión de licencias, el Reglamento de la República Popular China sobre telecomunicaciones, las Disposiciones sobre la administración de empresas de telecomunicaciones y las Medidas relativas a la administración del certificado de aprobación de las telecomunicaciones contenían disposiciones concretas sobre el procedimiento de calificación de las solicitudes del certificado de aprobación en materia de telecomunicaciones. Los tres reglamentos mencionados habían sido publicados en el sitio Web del MII, de manera que el procedimiento era plenamente transparente. Las leyes y reglamentos que regían el sector de las telecomunicaciones eran las siguientes: el Reglamento de la República Popular China sobre telecomunicaciones, el Reglamento de administración de la radio inalámbrica de la República Popular China, las Medidas administrativas para los servicios de información por Internet y las Disposiciones sobre la administración de empresas de telecomunicaciones con inversión extranjera. Basándose en esas leyes y reglamentos, se habían publicado otras 24 normas departamentales, incluyendo medidas de administración sobre los certificados de aprobación en materia de telecomunicaciones. China había acometido la redacción de la Ley de telecomunicaciones en 2001 y continuaría perfeccionando su corpus legislativo relativo a los servicios de telecomunicaciones. El representante dijo que de conformidad con el Reglamento de la República Popular China sobre telecomunicaciones, los servicios de radiodifusión formaban parte de los servicios de telecomunicaciones e indicó que la planificación, distribución y asignación reglamentarias de los recursos de telecomunicaciones a escala nacional estaban encomendadas al MII. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones solamente podían solicitar una licencia nacional al MII.

69. En respuesta a la pregunta sobre los operadores de telecomunicaciones dominantes, dijo que, según la Orden 291 del Consejo de Estado y su reglamento administrativo sobre interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones, los operadores dominantes eran aquellos que controlaban las instalaciones necesarias para las telecomunicaciones básicas y más del 50 por ciento del mercado de la telefonía local fija y las redes locales y, asimismo, podían influir de forma sustancial en otros operadores de telecomunicaciones que accedieran al mercado. A los operadores dominantes se les exigía que establecieran normas de interconexión y facilitaran la interconexión durante el período solicitado. No podían negar la interconexión con otros operadores de telecomunicaciones o unidades operacionales de redes específicas y les estaba prohibido obstaculizar la elección de otros operadores por los consumidores. Los operadores dominantes debían suministrar a otros proveedores de telecomunicaciones servicios de la misma calidad que la que tenían los mismos servicios prestados a sus propias redes y a sus sucursales o filiales. Además, tenían la obligación de adoptar las medidas técnicas necesarias para que los consumidores pudieran acceder a sus funciones de llamadas de red.

70. Respondiendo a la pregunta relativa a las audiencias públicas para el establecimiento de precios orientados o fijados por el Gobierno, dijo que China se enfrentaba a una situación nueva en el mercado de las telecomunicaciones después de la adhesión y que, al efectuar ajustes en el mercado, los recursos se distribuirían de forma razonable. Para promover el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, el MII y la Comisión Estatal de Desarrollo y Planificación (SDPC) habían aplicado precios ajustados por el mercado cuando existía un nivel suficiente de competencia, que permitía a las empresas determinar y ajustar las tarifas de forma autónoma. Manifestó que la evaluación cuantitativa de los niveles de competencia en el mercado de telecomunicaciones era una actividad difícil y que la mayoría de los países carecían de una norma detallada de evaluación. China estaba abierta a una cooperación más estrecha con otros Miembros y confiaba en aprender de sus experiencias para establecer normas de evaluación de la competencia en el mercado chino compatibles con la situación interna. Tanto los precios de fijación estatal como los de orientación estatal se aplicaban a unas pocas esferas de las telecomunicaciones básicas caracterizadas por una situación de monopolio o de competencia insuficiente. El nivel de las tarifas de telecomunicaciones sujeto a la fijación estatal de precios era propuesto por el MII y aprobado por el Consejo de Estado previa consulta con el organismo encargado de la fijación de precios dependiente del Consejo de Estado. El nivel de las tarifas de telecomunicaciones sujeto a orientación estatal lo establecía y promulgaba el MII previa consulta con el organismo encargado de la fijación de precios dependiente del Consejo de Estado.

71. En respuesta a una segunda pregunta relativa a la interconexión, el representante respondió que la interconexión entre las redes de telecomunicaciones debía basarse en los principios de viabilidad técnica, sensatez, equidad y cooperación mutua. Las normas relativas a la liquidación en materia de interconexión debían basarse en el costo. Con el desarrollo de la interconexión entre las redes de telecomunicaciones, la determinación de las tarifas de interconexión se ajustaría a las prácticas internacionales. China deseaba reforzar la cooperación con otros Miembros y compartir sus experiencias positivas sobre las normas relativas a los costos y la liquidación en la esfera de la interconexión. Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de la República Popular China sobre telecomunicaciones se establecían normas y procedimientos de interconexión basados en los principios de no discriminación y transparencia. Antes de su aplicación, el MII examinaba y aprobaba las normas de interconexión, que eran vinculantes para los operadores dominantes. Se concertaban acuerdos de interconexión entre redes públicas de telecomunicaciones y entre redes de telecomunicaciones públicas y específicas mediante consulta entre las partes y con arreglo al Reglamento sobre la administración de la interconexión de redes y se presentaban al MII.

72. En respuesta a una pregunta sobre la construcción de redes públicas de telecomunicaciones, el representante dijo que la construcción de redes especializadas de telecomunicaciones y de transmisión de radio y televisión, incluida la distribución de derechos de paso, estaba sujeta a la planificación general y administración de la industria por parte de la autoridad encargada de la industria de la información dependiente del departamento competente de la industria de la información del Consejo

de Estado, que autorizaría el plan general de desarrollo y construcción del sector de la información y tenía en cuenta los objetivos de desarrollo de la economía y sociedad nacionales.

73. En respuesta a una pregunta relativa a la supresión de las restricciones geográficas, dijo que en la Lista de China se mencionaba la eliminación de las limitaciones geográficas durante el período transitorio y que el proceso se efectuaría de conformidad con la lista de compromisos.

74. Respondiendo a la pregunta sobre el procedimiento de licitación pública para la concesión de licencias en la esfera de las telecomunicaciones básicas, dijo que la expedición de licencias para la explotación de las telecomunicaciones básicas estaba sujeta a la aprobación de la solicitud. El MII estudiaría y elaboraría lo antes posible normas sobre la expedición de licencias de explotación de los servicios de telecomunicaciones básicas mediante licitación pública, con el fin de aumentar la transparencia en la concesión de licencias.

75. Refiriéndose a los servicios de logística y en respuesta a una pregunta relativa a la participación mayoritaria de extranjeros en las empresas de logística, señaló que la participación de los inversores extranjeros en las empresas de logística con inversión extranjera que desarrollaban actividades de logística de la distribución internacional no podía ser superior al 50 por ciento. El representante dijo que eso permitía a China mantener determinadas políticas y señaló que la liberalización del límite al capital se efectuaría al mismo tiempo que la del derecho a comerciar. Esa disposición se había establecido debido a los límites al capital extranjero en los ámbitos de la importación y exportación en la logística de la distribución internacional y en los servicios internacionales de agentes expedidores en materia de logística.

76. Con respecto a los servicios de distribución y a la pregunta relativa al período transitorio para una serie de productos especiales enumerados en la Lista de China, recordó el período transitorio para el petróleo crudo y elaborado e indicó que se estaban elaborando las leyes y reglamentos pertinentes. En cuanto a la reglamentación de la distribución de vehículos automóviles, dijo que la situación actual preveía que se podían aprobar simultáneamente las solicitudes para la distribución de automóviles de producción nacional e importados.

77. En relación con los servicios de agentes expedidores y la participación extranjera mayoritaria, dijo que el Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica (MOFTEC) había revisado y promulgado un Reglamento sobre la administración de empresas internacionales de agentes expedidores con inversión extranjera, que determinaba el plazo exacto para que los inversores extranjeros establecieran empresas conjuntas en los servicios internacionales de agentes expedidores en las que los extranjeros ejercían el control u ocupaban una posición dominante. El MOFTEC anunciaría las empresas internacionales de agentes expedidores con inversión extranjera en el momento oportuno y permitiría la participación mayoritaria de extranjeros antes del 11 de diciembre de 2002, de conformidad con el compromiso asumido por China. Respondiendo a una pregunta referente al derecho de emitir el conocimiento de embarque, dijo que en virtud del Reglamento de transporte marítimo internacional promulgado por el Consejo de Estado para su aplicación en diciembre de 2001, las empresas internacionales de agentes expedidores podían emitir conocimientos de embarque una vez hubieran recibido la calificación para operar como transportistas con buques.

78. Con respecto a los servicios de transporte marítimo y en respuesta a una pregunta relacionada con el acceso a las instalaciones portuarias y a su utilización, dijo que el sistema de descuento de las tasas de utilización de las instalaciones portuarias había sido suprimido con efecto a partir del 1º de enero de 2002. En respuesta a una pregunta sobre el derecho a comerciar, aunque no se trataba de una cuestión relativa al comercio de servicios, dijo que el MOFTEC estaba estudiando su ampliación y que se estaban preparando las leyes y reglamentos pertinentes, que estarían en conformidad con los compromisos asumidos por China que figuraban en el informe del Grupo de Trabajo. En cuanto al reembolso del impuesto sobre el valor añadido, dijo que de conformidad con el régimen de adhesión de China, el comercio de servicios tales como las finanzas, seguros, transporte, construcción y



turismo, estaba sujeto a un impuesto sobre actividades comerciales y que la devolución del impuesto sobre el valor añadido se aplicaba solamente en el comercio de mercancías. La cuestión del reembolso del impuesto sobre el valor añadido no debía ser planteada en el examen.

79. El representante reiteró una afirmación anterior indicando que, en relación con las respuestas escritas, el párrafo 18 del protocolo era el único fundamento jurídico que regía el mecanismo de examen de transición y que no se podía justificar la petición de respuestas escritas basándose en el contenido de dicho párrafo. Observó que existían interpretaciones diferentes del mismo, pero que la interpretación de ese párrafo no formaba parte del mandato del Consejo. Además, creía que la información que China había facilitado con anterioridad a la reunión y en el curso de la misma era suficiente para efectuar el examen en la forma adecuada. Convino en que se distribuiría la declaración del jefe de la delegación en aras de la transparencia y para facilitar la preparación de informes a las capitales por los delegados. Por último, reiteró que se podían mantener contactos bilaterales, aunque no en relación con el mecanismo de examen de transición, y que ello facilitaría el intercambio de pareceres. Añadió que todas las cuestiones no se podían resolver en un solo examen y recordó que se trataba de un programa de ocho o nueve años de duración. Comparó la situación con la del niño al que no se le permite graduarse en un programa de ocho a diez años después del primer examen porque no se habían podido plantear todas las cuestiones en el mismo examen. China esperaba con interés celebrar nuevas consultas bilaterales y multilaterales y agradecía a los Miembros las preguntas y observaciones que habían formulado.

80. La Presidenta agradeció a China las respuestas que había facilitado y propuso que el Consejo tomara nota de las declaraciones efectuadas antes de pasar a la cuestión del informe al Consejo General.

81. Así se decidió.

82. En relación con el informe al Consejo General, la Presidenta propuso que la Secretaría preparara un informe fáctico en el que se indicara que de conformidad con la sección 18 del Protocolo de Adhesión de la República Popular China, el Consejo del Comercio de Servicios había examinado la aplicación por China del Acuerdo sobre la OMC y de las disposiciones pertinentes del Protocolo en la reunión celebrada el 25 de octubre de 2002; que se habían recibido comunicaciones escritas de cinco Miembros de la OMC, a saber, las Comunidades Europeas, los Estados Unidos, el Japón, el Taipei Chino y Australia; y que en el informe de la reunión figuraba una descripción pormenorizada del debate. A tenor de lo acordado anteriormente en el curso de la reunión, el informe del Comité de Servicios Financieros formaría parte del informe del Consejo del Comercio de Servicios.

83. Así se decidió.

#### **D. PROPUESTAS RELATIVAS A UN EXAMEN TÉCNICO DE LAS DISPOSICIONES DEL AGCS - PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO XX**

84. La Presidenta recordó que en la reunión del Consejo celebrada en el mes de julio, la Secretaría había presentado una nota de antecedentes sobre la historia de la redacción del párrafo 2 del artículo XX, que figuraba en el documento JOB(02)/89. A continuación había tenido lugar un debate preliminar en el que algunos Miembros habían analizado la conveniencia de llevar a cabo un examen técnico de esa disposición. En respuesta a una petición del Canadá, ella había propuesto que la Secretaría preparara una breve nota en la que se desarrollasen las hipótesis planteadas por algunos Miembros en dicha reunión. La nueva nota de antecedentes de la Secretaría figuraba en el documento JOB(02)/153 de fecha 24 de octubre de 2002.

85. La Secretaría dijo que la nota era de muy fácil comprensión e incluía algunos ejemplos ilustrativos para esclarecer en qué contextos podía haber ambigüedades, particularmente cuando las anotaciones relativas al acceso a los mercados o el trato nacional consistían en la indicación "sin

consolidar / ninguna" o viceversa. Se planteaba la cuestión de la superposición en el alcance de los dos artículos. El orador dijo que en el último párrafo no se proponía medida alguna, sino que se planteaba si era necesario adoptarla.

86. El representante del Brasil dijo que, al parecer, la situación que se describía en la parte A de la nota no era la misma que la que se señalaba en la sección B, pues, si bien el párrafo 2 del artículo XX no daba respuesta a la hipótesis planteada en la sección A, sí indicaba la forma de consignar un compromiso en la situación reseñada en la sección B. En relación con la sección A, en la que el acceso a los mercados estaba sin consolidar y el trato nacional contenía una restricción respecto del modo 3, se planteaba la cuestión de si un Miembro podía consignar una medida que vulneraba tanto el artículo XVI como el XVII. En el párrafo 18 del documento S/C/M/61 se señalaba que era posible consignar una restricción cuantitativa discriminatoria en la columna correspondiente al acceso a los mercados en virtud del párrafo 2 del artículo XX. La posición opuesta era que no sería posible porque si el elemento discriminatorio no figuraba en relación con el trato nacional, sería imposible consignar una medida discriminatoria, aunque fuera cuantitativa. La situación era diferente en el ejemplo B (en el que se indicaba "ninguna" en la columna de acceso a los mercados y "sin consolidar" en la correspondiente al trato nacional) y la cuestión era si un Miembro podía anotar una restricción discriminatoria con un componente de acceso a los mercados. La respuesta del párrafo 2 del artículo XX era negativa, pues si una medida suponía al mismo tiempo una restricción en el sentido del artículo XVI y del artículo XVII, debería haber figurado en la columna de acceso a los mercados. Si en esa columna figuraba la indicación "ninguna", no se podría consignar una medida discriminatoria que fuera también cuantitativa. Ello significaba que la posibilidad que quedaba era anotar una limitación discriminatoria que no fuera de carácter cuantitativo. El orador señaló que la conclusión podía ser que en el ejemplo B el párrafo 2 del artículo XX facilitaba una respuesta, en tanto que en el ejemplo A existía una ambigüedad que se podía aclarar mediante una interpretación convenida.

87. El representante de Hong Kong, China se mostró de acuerdo con la cautela de la Secretaría que se especificaba en la primera nota a pie de página. Afirmó que coincidía con la evaluación que hacía el Brasil de las secciones A y B de la nota y deseaba analizar más a fondo el párrafo 9 del documento relativo a la aplicabilidad del párrafo 2 del artículo XX. En el párrafo 9 se indicaba que había dos casos en los que era aplicable el párrafo 2 del artículo 20. El primero era que solamente se aplicaría cuando figurara una consolidación con limitaciones tanto en la columna de acceso a los mercados como en la correspondiente al trato nacional, pero no en otras situaciones, como las que se mencionaban en los ejemplos A y B. El orador dijo no entender por qué debía limitarse de esa forma la aplicabilidad del párrafo 2 del artículo XX. Si se anotaba la expresión "sin consolidar" en la columna del trato nacional, la medida incompatible con el acceso a los mercados y el trato nacional debería figurar, según el texto del párrafo 2 del artículo XX, en la columna correspondiente al acceso a los mercados. El orador preguntó por qué la Secretaría consideraba que no era aplicable en esa situación. La segunda situación que se mencionaba en el párrafo 9 decía que el párrafo 2 del artículo XX no era aplicable cuando el trato nacional estaba "sin consolidar", ya que la consignación en la columna correspondiente al artículo XVI indicaba también una salvedad al artículo XVII. El orador dijo que no estaba de acuerdo con esa interpretación porque el texto del párrafo 2 del artículo XX ("indica también una condición o salvedad al artículo XVII") no presuponía un compromiso en el marco del artículo XVII y, en consecuencia, no estaba seguro de que no fuera aplicable el párrafo 2 del artículo XX. De nuevo pidió que se aclarara cómo era posible esa interpretación. Señaló que un grupo especial tal vez suscribiría esa interpretación, con la que no concordaban algunos Miembros.

88. El representante subrayó dos cuestiones que serían esenciales para encontrar una solución. La primera era si a tenor del párrafo 2 del artículo XX un Miembro estaba obligado a consignar una medida incompatible con los artículos XVI y XVII en la columna de acceso a los mercados aun cuando no tuviera la intención de asumir un compromiso en ninguna de las dos columnas. La segunda se refería al significado de la anotación "sin consolidar", si significaba que no se podían

anotar medidas, si se trataba de una medida en sí misma o si podía representar la enumeración de todas las medidas posibles. El orador observó que el análisis que hacía la Secretaría de las hipótesis que se planteaban cuando se incluía la expresión "sin consolidar" estaba en la línea del método que utilizaban habitualmente los Miembros para la consignación en listas, es decir, la utilización de la fórmula "sin consolidar, excepto ..." y parecía dar lugar a la misma ambigüedad. Sugirió que una posible solución sería una convención de consignación, o interpretación, convenida de forma multilateral, como considerar que cualquier medida, incluso la indicación "sin consolidar" en la columna de acceso a los mercados, sería considerada incompatible únicamente con el acceso a los mercados, salvo que se indicara otra cosa. Dijo que seguía reflexionando sobre la forma en que una anotación en la columna correspondiente al trato nacional podría estar sujeta a la misma interpretación y tal vez volvería sobre ello, y reiteró que desde el punto de vista de Hong Kong, China, la finalidad de ese debate era aportar la mayor claridad jurídica posible, particularmente teniendo en cuenta que los Miembros iban a asumir nuevos compromisos. Consideraba que el proceso de refundición de las listas que se estaba llevando a cabo ofrecía la oportunidad de introducir los ajustes técnicos que pudiera exigir la solución que decidieran adoptar los Miembros.

89. El representante de Suiza subrayó la importancia de la cuestión en relación con el proceso de peticiones y ofertas. Coincidió con el Brasil en que, en el ejemplo del párrafo 6 (en el que se anotaba la indicación "ninguna" en la columna de acceso a los mercados), el párrafo 2 del artículo XX preveía que prevalecería la anotación de dicha columna, pero no disponía que en ese caso la anotación relativa al trato nacional se aplicaría también al acceso a los mercados. La respuesta no estaba tan clara en el otro ejemplo (en el que figuraba una limitación en ambas columnas o solamente en la primera). El orador dijo que el párrafo 2 del artículo XX establecía que las medidas incompatibles con ambos artículos debían inscribirse en la columna correspondiente al acceso a los mercados. Se trataba de una mera convención de consignación en virtud de la cual se podían consignar en listas las medidas del sistema jurídico de un Miembro incompatibles con el acceso a los mercados y el trato nacional. Sin embargo, el párrafo 2 del artículo XX no contenía indicación alguna respecto de la situación inversa, es decir, cuando figuraran limitaciones en relación con el acceso a los mercados y la indicación "ninguna" en la columna relativa al trato nacional. En ese caso, era imposible saber si la intención era aplicar el párrafo 2 del artículo XX o indicar que no había limitaciones al trato nacional, sino tan sólo al acceso a los mercados. A su juicio, ése era el origen técnico del problema, es decir, que el párrafo 2 del artículo XX se aplicaba únicamente en un sentido. El orador dijo que si bien era cierto que los debates en el seno del Consejo podían contribuir a encontrar una solución, sería necesario hacer alguna referencia a las normas clásicas de la interpretación de los tratados en el derecho internacional en relación con las intenciones de las partes y el contexto.

90. Refiriéndose al enfoque prudente adoptado en el párrafo 9 de la nota de la Secretaría, el representante se inclinaba a pensar en principio que los Miembros que anotaban la indicación "sin consolidar" en la columna de acceso a los mercados pretendían aplicar el párrafo 2 del artículo XX y deseaban abarcar todas las posibles medidas e "inscribirlas" mediante la anotación "sin consolidar". Añadió que en la mayoría de las listas existentes, cuando aparecía la expresión "sin consolidar" en la columna correspondiente al trato nacional figuraba también en la otra columna. Ese hecho sugería la solución opuesta, que los Miembros consideraban que no era aplicable el párrafo 2 del artículo XX y ello debía ser considerado en cualquier solución. A su juicio, lo primero que había que hacer era definir el alcance del párrafo 2 del artículo XX y los casos en que era aplicable. La segunda cuestión era comprender cómo se aplicaba y en qué forma se podía aplicar la convención de consignación en la situación inversa con objeto de interpretar las listas. Con miras al futuro, dijo que un examen podría ser útil para las negociaciones en curso, aunque también había que tener en cuenta que un examen de las disposiciones podía modificar el alcance de los compromisos vigentes, pues una nueva redacción tendría consecuencias jurídicas. Por esa razón, era de la mayor importancia que en cualquier solución que se adoptara se especificara el acuerdo alcanzado lo más claramente posible para evitar confusiones en el futuro.

91. El representante del Canadá dijo que deseaba volver sobre ese punto en la reunión que celebraría el Consejo en diciembre. Al igual que otras delegaciones, consideraba que las cuestiones que se planteaban en el párrafo 9 subrayaban la necesidad de seguir examinando ese punto. El hecho de que existieran en los compromisos específicos muchos casos en los que no se podía deducir claramente el alcance exacto del acceso a los mercados y el trato nacional implicaba que el Consejo debía reflexionar respecto de si una aclaración técnica podría afectar a los compromisos vigentes.

92. La representante de Polonia reconoció que solamente los Miembros estaban en condiciones de explicar el contenido de sus listas, y que su delegación tenía problemas sobre la forma de interpretar el contenido de otras listas. Sugirió que una solución al caso que se planteaba en el párrafo 9 sería que el párrafo 2 del artículo XX se aplicara únicamente cuando se consignaran consolidaciones en las dos columnas. Redundaría en una mayor claridad de las listas que los Miembros convinieran en que en el futuro las limitaciones en la columna de acceso a los mercados con un elemento discriminatorio se indicarían claramente en dicha columna. Si la limitación al acceso a los mercados se aplicaba también al trato nacional, se podría incluir el término "extranjero", lo que indicaría que también se limitaba el trato nacional. Otra solución consistiría en incluir en la columna de acceso a los mercados la frase "limita también el trato nacional", como se proponía en el párrafo 18 de las directrices para la consignación en listas, o añadir en la columna correspondiente al trato nacional la frase "ninguna, excepto los compromisos consignados en la columna de acceso a los mercados". Por último, señaló que si no se modificaban las listas no desaparecerían la superposición entre los artículos XVI y XVII y, a su juicio, era necesario eliminar las dudas sobre la interpretación de las listas.

93. La Presidenta sugirió que, ante el interés que había despertado la nota de la Secretaría, tal vez sería conveniente celebrar una reunión informal e interactiva sobre esa cuestión.

94. La representante del Taipei Chino dijo que toda posible aclaración o interpretación afectaría a las listas existentes y también tendría consecuencias en la ronda de negociaciones en curso. La oradora preguntó si tradicionalmente se había considerado que la inscripción "sin consolidar" en la columna de acceso a los mercados permitía a los Miembros actuar de forma discrecional en cuanto a las medidas relativas al acceso a los mercados. A su juicio, eso no quedaba claro en el caso en que el trato nacional estuviera sin consolidar pero se hubiera consolidado el acceso a los mercados. Por último, con respecto a la inclusión de la indicación "sin consolidar" en relación con el trato nacional, dijo que el ejemplo que figuraba en la nota de la Secretaría solamente era aplicable al modo 3 y se preguntaba en qué forma se aplicaría el párrafo 2 del artículo XX cuando existiera un compromiso pleno en relación con el acceso a los mercados y la situación "sin consolidar" en el trato nacional, para el modo 1. Señaló que el debate que se había planteado no prejuzgaba las posiciones y los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de la OMC.

95. El representante de la India tomó nota de la propuesta de Hong Kong, China sobre la convención de consignación y los comentarios sustantivos que se habían hecho en la reunión y en el mes de julio y reiteró que no se había alcanzado el acuerdo de llevar a cabo un examen. Afirmó asimismo que deseaba volver sobre ese punto en la siguiente reunión.

96. La Presidenta señaló que entendía también que el Consejo no había decidido realizar un examen.

97. El representante del Uruguay señaló que formulaba sus observaciones sin perjuicio de un examen técnico de las disposiciones del AGCS y dijo que los Miembros estaban analizando un problema que ya se había planteado en el momento de negociar las directrices para la consignación en listas de los compromisos específicos. Consideraba que los Miembros que habían identificado el problema podrían también aportar posibles soluciones en forma de ejemplos concretos, sin perjuicio de que se efectuara un examen. Los Miembros, y tal vez también la Secretaría, podrían hacer también una contribución, basándose posiblemente en las directrices para la consignación en listas, que

podrían servir de guía, aunque no fueran jurídicamente vinculantes. El orador subrayó la importancia de examinar posibles soluciones y tomar en consideración los procedimientos de adopción de decisiones en la OMC y recordó que el plazo para la presentación de las ofertas iniciales terminaría dentro de cuatro meses y que era necesario resolver rápidamente los posibles problemas de naturaleza técnica. Dijo, asimismo, que cualquier posible decisión debería tomarse sin carácter retroactivo, es decir, que tendría efecto a partir del momento en que se adoptara y no afectaría a decisiones anteriores.

98. La representante de Tailandia manifestó que los resultados de un posible examen no deberían ser retroactivos y que Tailandia se había avenido inicialmente a examinar ese punto en el entendimiento de que se trataría de un ejercicio técnico y no menoscabaría la claridad jurídica de las listas. Se sentía un tanto alarmada por el hecho de que en un debate cuya finalidad era aclarar el contenido del párrafo 2 del artículo XX algunos Miembros hicieran propuestas sobre la forma en que se podían interpretar determinadas anotaciones de las listas como la indicación "sin consolidar". A ese respecto, recordó las observaciones de la Secretaría contenidas en la última frase del párrafo 2 del documento JOB(02)/153. Reiteró que el alcance del debate no debía superar los límites acordados.

99. La Presidenta insistió en que el Consejo había convenido en que no se trataba de un examen técnico, sino de analizar distintas esferas en las que pudiera ser necesario realizar un examen. En el transcurso de la primera reunión del año, el Consejo había acordado a esos efectos discutir el contenido del párrafo 2 del artículo XX. Afirmó que las tres últimas reuniones habían sido útiles para determinar si existían ambigüedades en el texto del párrafo 2 del artículo XX y propuso que el Consejo convocara una reunión informal para tratar ese punto.

100. El representante de México destacó la importancia de esa cuestión en las negociaciones y pidió que tuviera lugar una reunión informal durante la semana en que se celebraría el conjunto de reuniones sobre servicios. En cuanto a las dos hipótesis que se planteaban en la nota, era necesario tener en cuenta que en la mayoría de los países ya existían proveedores extranjeros de servicios que gozaban del trato nacional y se debían tomar en consideración las consecuencias de cualquier posible interpretación. Las disposiciones relativas al trato nacional no se podrían modificar para quienes ya estaban presentes en el mercado cuando se había negociado el AGCS. Los nuevos participantes que se habían establecido después de la conclusión de la Ronda Uruguay se regirían por los compromisos que se hubieran asumido en esa primera ronda. Si los Miembros hubieran aplicado restricciones a los proveedores de servicios ya establecidos, ello podría haber afectado a las actividades de los proveedores que ya estaban presentes en el mercado antes de la negociación de un acuerdo. Ésa era la razón por la que se consideraba necesaria una cláusula relativa a los derechos de anterioridad y una situación de *statu quo* para proteger a los proveedores ya presentes en el mercado. Luego, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, los Miembros podrían introducir medidas restrictivas en la columna del acceso a los mercados o en la correspondiente al trato nacional. Consideraba que la redacción del párrafo 2 del artículo XX era clara, pero que lo que no estaba claro eran las restricciones consignadas en las columnas relativas al acceso a los mercados y el trato nacional y, en consecuencia, eran necesarios nuevos ejemplos. El orador dijo que el documento era útil y expresó su confianza en que fuera posible otorgar una mayor atención a la situación de quienes ya estaban presentes en el mercado antes de la negociación del Acuerdo y a la forma en que les afectarían las anotaciones que se hicieran en las columnas correspondientes al acceso a los mercados y al trato nacional.

101. La Presidenta dijo que entendía que el Consejo había convenido en convocar una reunión informal sobre ese punto antes de que tuviera lugar la siguiente reunión formal y propuso que antes de esa reunión los Miembros que lo desearan hicieran llegar a la Secretaría sus preguntas, que junto con las que se habían formulado en la reunión serían utilizadas para orientar el inicio del debate. Invitó a los Miembros a examinar las tres notas de la Secretaría sobre esa cuestión antes de la reunión informal.

102. La Secretaría, intentando aclarar la segunda frase del párrafo 9 del documento JOB(02)/153, dijo que tal vez no se había expresado adecuadamente el grado de rotundidad de esa frase, de manera que se podía entender, incorrectamente, que era más concluyente de lo que se pretendía. Dijo que se entendería mejor el significado pretendido si los Miembros leyera la frase como si estuviera precedida por la expresión "se podría argumentar que ...".

#### **E. OTROS ASUNTOS**

103. La Presidenta informó al Consejo que el 21 de octubre había recibido una carta del Embajador Smith, Presidente del Comité de Comercio y Desarrollo en Sesión Extraordinaria. En la carta se indicaba que durante la reunión que había celebrado del 28 de enero al 1º de febrero de 2002, el CNC había convenido en que "el examen de todas las disposiciones sobre trato especial y diferenciado con miras a reforzarlas y hacerlas más precisas, eficaces y operativas, previsto en el párrafo 44 de la Declaración Ministerial, será realizado por el Comité de Comercio y Desarrollo en sesiones extraordinarias". Añadió que en cumplimiento de ese mandato, el Presidente del CCD en Sesión Extraordinaria había pedido "información sobre cualquier debate u otras novedades en relación con el trato especial y diferenciado que hubieran tenido lugar en el Consejo del Comercio de Servicios" y que esa información debía ser facilitada antes del 30 de noviembre de 2002. La oradora propuso responder mediante una carta en la que describiría las cuestiones relacionadas con el trato especial y diferenciado que hubieran surgido en el Consejo y en el entendimiento de que eso se hacía sin perjuicio de la posición de ningún Miembro sobre ese asunto.

104. El Consejo así lo acordó.

105. La Presidenta comunicó asimismo al Consejo que el 22 de octubre había recibido una carta del Embajador Jóhannesson, Presidente del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Transferencia de Tecnología, con la solicitud de que le informara sobre las deliberaciones, comunicaciones y otras novedades que se hubieran registrado en relación con el comercio y la transferencia de tecnología en el Consejo del Comercio de Servicios. El Grupo de Trabajo había decidido recabar esa información a otros órganos de la OMC y que se le remitiera antes del 20 de noviembre de 2002. La oradora propuso responder mediante una carta en la que se describieran las cuestiones relacionadas con el comercio y la transferencia de tecnología que hubieran surgido en el Consejo y en el entendimiento de que eso se hacía sin perjuicio de la posición de ningún Miembro sobre ese asunto.

106. El Consejo así lo acordó.

---